

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Francisco Javier Agudelo Hincapié
DEMANDADO	Gobernación de Antioquia
PROCEDENCIA	Juzgado 27 Laboral del Cto. de Medellín atendiendo las directrices impartidas en el Acuerdo CSJANTA23-61 24 de marzo de 2023
RADICADO	05001 3105 018 2021 00109 01
INSTANCIA	segunda
PROVIDENCIA	sentencia Nro. 258 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de jubilación convencional
DECISIÓN	Revoca y acoge pretensiones

Hoy, **quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por la apoderada del señor **Francisco Javier Agudelo Hincapié**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito - Acuerdo CSJANTA23-61 24 de marzo de 2023 - dentro del proceso ordinario laboral que promoviera en contra del **Departamento de Antioquia**. Radicado único nacional 05001 3105 **018 2021 00109** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 029**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Se orientan las pretensiones del demandante a que se declare que es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo y Laudos Arbitrales vigentes suscritos entre el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia y el referido ente territorial. En consecuencia, se condene a la Gobernación de Antioquia a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación convencional, según lo estipulado en la cláusula 12 del acuerdo suscrito el 9 de diciembre de 1970, presente en el artículo 96 de la recopilación de normas convencionales, desde el momento en que cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios, junto con el retroactivo debidamente indexado, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas.

Para respaldar su solicitud, señala que nació el 4 de mayo de 1967, arribando a los 50 años el mismo día y mes de 2017. Alega haberse vinculado como trabajador oficial al Departamento de Antioquia el 30 de enero de 1990, completando 20 años de servicio en 2010. Manifiesta que entre Sintradepartamento y la Gobernación de Antioquia se han suscrito varias convenciones colectivas de trabajo, siendo beneficiario de las mismas, al haberse afiliado a dicha organización sindical el 14 de mayo de 1990. Subraya que la cláusula 12 del acuerdo del 9 de diciembre de 1970, presente en la recopilación de normas convencionales en el artículo 96, regula la pensión de jubilación, con detalles sobre la forma de liquidación en los artículos 99 y 100. Informa que pidió la prestación convencional, negada en Resolución No. 2020060023605 del 13 de mayo de 2020, confirmada en los actos administrativos 2020060107839 del 6 de agosto del 2020 y 2020060229493 del 21 de diciembre del 2020, argumentándose la necesidad de acreditar los requisitos establecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Sostiene que la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación

Laboral, establece que el único requisito para obtener la prestación es el tiempo de servicio, considerando la edad únicamente como una condición para la exigibilidad y no como un supuesto de causación.

Una vez subsanadas las deficiencias señaladas por el despacho, la **acción fue admitida mediante auto con fecha del 03 de junio de 2021**. La Gobernación de Antioquia, debidamente notificada, emitió pronunciamiento aceptando los hechos expuestos, excepto lo determinado por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral. **Se opuso a las pretensiones** arguyendo que solo puede reconocer pensiones con base en normas convencionales a los trabajadores oficiales que hayan adquirido el derecho hasta el 30 de julio de 2010, ya que a partir del 31 de julio de ese año estas normas perdieron vigencia, por tal, al cumplir el actor con los requisitos el 6 de mayo de 2017, ya no tenía derecho a la aplicación de las convenciones invocadas.

Finalmente, formuló las excepciones de mérito que denominó: imposibilidad jurídica de reconocer y pagar pensión de jubilación convencional, inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, petición antes de tiempo y cualquier otra excepción.

La primera instancia concluyó con **sentencia emitida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito**, en la que absolvió al ente Departamental de las pretensiones planteadas en su contra. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación e impuso costas en contra del actor.

Después de revisar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral, y de la Corte Constitucional, el juez concluyó que la demandada tenía razón al denegar la pensión solicitada. Esto se debe a que el Acto Legislativo 01 del 2005 previó que la vigencia del pacto colectivo en

materia pensional se extendería solo hasta el 31 de julio del 2010, fecha en la que se extinguieron todos los regímenes extralegales en la materia. Por lo tanto, al no acreditar el actor los requisitos necesarios (edad y tiempo de servicios) para acceder a la prestación antes de dicha calenda, y no contar con un derecho adquirido, al no haber causado la prestación, no era procedente impartir ningún tipo de condena. Además, adujo que la convención colectiva contaba con una redacción desafortunada, donde la intención de los pactantes era clara: cumplir dos requisitos, tiempo y edad; por lo tanto, solo cuando se acredita el último de los supuestos se entiende causada la pensión.

Inconforme con la decisión, el demandante interpuso **recurso de apelación**, resumido aquí debido a su extensión. En él, argumenta que las sentencias analizadas por el despacho no son aplicables ni guardan relación con el caso en cuestión, al tratar supuestos distintos.

Se refiere al contenido de la sentencia SU 222 del 2023 de la Corte Constitucional, donde se abordó una situación similar de pensión convencional y se determinó que la Sala de descongestión de la Corte Suprema desconoció el principio de favorabilidad al interpretar la cláusula convencional de manera contraria a los intereses del trabajador. Con base en esta jurisprudencia y considerando que la normativa se ha dilucidado en múltiples ocasiones, estableciendo que los trabajadores tienen un derecho adquirido si cumplen el tiempo de servicio y les falta la edad, aduce que es razonable reconocer la pensión de jubilación cuando se acreditan 20 años de trabajo y 50 años de edad.

Además, señala que las recomendaciones de la OIT, aunque no sean vinculantes directamente, generan obligaciones para los Estados, según lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debiendo ser acogidas para orientar el sentido y alcance de las decisiones judiciales.

Puntualiza que, de acuerdo con precedente del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, cuando existen dos interpretaciones posibles, se debe elegir la que sea más favorable al trabajador. En este caso, sostiene que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia respaldan la interpretación que la edad es un requisito de exigibilidad, no de causación del derecho. Por lo tanto, para apartarse de ese precedente se requiere una sustentación jurídica sólida, la cual, según su posición, no se dio en el caso en cuestión.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados se tienen que: Francisco Javier Agudelo Hincapié **nació el 04 de mayo de 1967**, cumpliendo los 50 años de edad en la misma fecha de 2017. **Presta sus servicios para el Departamento de Antioquia, desde el 30 de enero de 1990 en calidad de trabajador oficial**, afiliándose al sindicato el 14 de mayo de 1990. Solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación ante el Departamento el 13 de marzo de 2019, negada en Resolución 2020060023605 del 13 de mayo, confirmada en los actos 2020060107839 del 6 de agosto y 2020060229493 del 21 de diciembre todas fechas del 2020.

Así las cosas, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si al actor le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional o si, por el contrario, la misma se encuentra sometida al límite establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005. De darse respuesta positiva, se analizará lo atinente a los factores salariales que se deben incluir para efectos de liquidar la prestación.

Pues bien, para abordar el asunto, es necesario señalar que el 9 de diciembre de 1970, entre el Gobierno Departamental de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores al servicio de ente territorial, se suscribió una Convención Colectiva, estableciéndose en el artículo 12 la pensión de jubilación en los siguientes términos:

DUODÉCIMA. - El Gobierno departamental seguirá reconociendo le pensión de jubilación a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) años de trabajo y cincuenta (50) años de edad.

PARÁGRAFO 1º.- Igualmente reconocerá pensión vitalicia de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio mensual de los salarios devengados en el último año de servicios al trabajador amparado por esta Convención que cumpla o haya cumplido cincuenta (50) años de edad y que labore treinta (30) años o más, continuos o discontinuos, exclusivamente al servicio del Departamento de Antioquia.

PARÁGRAFO 2º.- A los trabajadores que estando vinculados cumplan sesenta (60) años de edad y más de quince (15) años de servicios continuos o discontinuos sin llegar a veinte (20) y deseen retirarse, el Gobierno Departamental les reconocerá una pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio mensual devengado durante el último año, siempre y cuando los servicios hubieren sido prestados exclusivamente al Departamento de Antioquia y en actividades regidas por contrato de trabajo con la Administración Departamental.

En las convenciones subsiguientes, como las suscritas para los períodos 1973-1974, 1979-1980, 1981-1982, 1982, no se hizo mención alguna a esta prestación. Sin embargo, en la Recopilación de Normas Convencionales y Laudos Arbitrales Vigentes entre 1945-2002, en el artículo 96 se instituyó la misma en idénticos términos a los señalados en la convención de 1970.

En este contexto, es relevante señalar que la Corte Constitucional, en sentencias SU-267-2019, SU-445-2019 y SU-027-2021, se refirió a la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas de trabajo como fuente formal de derecho. En estas providencias, se resalta la necesidad de examinar estas convenciones a la luz de los cánones de interpretación aplicables a cualquier norma laboral, exponiendo que, en la lectura de esos acuerdos se debe dar siempre aplicación al principio de ***indubio pro***

operario. En el caso específico de la Convención Colectiva de la Gobernación de Antioquia, al analizar la cláusula duodécima en cuestión, se concluyó que esta «... **no le exige [al trabajador] cumplir la edad de 50 años estando al servicio del departamento...**» Esta interpretación fue reiterada en la sentencia SU-022-2013, así:

"Por lo anterior, debido a que los jueces ordinarios en el caso examinado optaron por la interpretación más restrictiva de la norma convencional, esta corporación estableció que «las autoridades judiciales al omitir en su análisis interpretativo el principio constitucional de in dubio pro operario o de favorabilidad en sentido amplio, incurrieron en el defecto de violación directa de la Constitución y consecuentemente, al no realizar una interpretación sistemática entre la norma convencional y la carta fundamental dieron lugar a que se configurara el defecto material por interpretación». Además, se determinó que las autoridades judiciales también incurrieron en un desconocimiento del precedente constitucional porque la Sentencia SU-267 de 2019 era un precedente vinculante y de obligatoria observancia, en tanto «contenía una regla jurisprudencial relacionada con la cuestión a resolver, solucionaba un problema jurídico semejante y planteaba un punto de derecho similar»

/.../

Bajo la óptica principio de favorabilidad, al interpretar la cláusula duodécima de la citada convención colectiva de trabajo, para esta Sala es claro que el actor tiene derecho a la pensión de jubilación «al cumplir veinte (20) años de trabajo y cincuenta (50) años de edad»^[82], pudiendo cumplir con el requisito de edad luego de finalizado el vínculo laboral con la entidad territorial. En el caso concreto, está acreditado que el señor Pérez Balbín laboró en el Departamento de Antioquia durante más de 24 años (desde el 1 de abril de 1981 hasta el 2 de agosto de 2005) y que es beneficiario de la referida convención colectiva de trabajo, en tanto estuvo afiliado al Sindicato de Empleados y Trabajadores del Departamento de Antioquia –Sintradepartamento-. El 22 de enero de 2010, cumplió 50 años. Así, cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicio, por lo que tiene derecho a la pensión de jubilación convencional. Por lo tanto, la Sentencia SL4888-2021 del 20 de octubre de 2021 de la Sala de Descongestión núm. 1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que le negó la prestación convencional, vulneró los derechos de Hugo León Pérez Balbín a la Seguridad Social y a la negociación colectiva."

Acatando las decisiones adoptadas por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió las sentencias **CSJ SL4048-2019, CSJ SL2415-2020, CSJ SL3720-2020 y CSJ SL1308-2023**. En estas, se acogió la interpretación más favorable a los trabajadores de la Gobernación de Antioquia, según la

cual solo es necesario el cumplimiento del requisito del tiempo de servicio antes del límite establecido en el párrafo transitorio 3° del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, antes del 31 de julio de 2010, independientemente de que la edad se supere estando vigente o no el vínculo contractual.

Cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, inicialmente indicó que no era posible extender los efectos de las cláusulas de un convenio colectivo de trabajo más allá del 31 de julio de 2010, en la medida en que se entendía que, para todos los efectos, ese fue el plazo máximo fijado por el constituyente para obtener un beneficio pensional de estirpe extralegal (sentencias SL2798-2020, SL2543-2020 y SL2986-2020).

Sin embargo, en la **SL3635-2020**, reiterada en la **SL4904-2021**, la alta Corporación **modificó su postura, precisando que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cobije un periodo superior a esa data, ésta debe respetarse, pues, de una parte, si se previó de esa manera desde el comienzo, es porque la voluntad de los partícipes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, porque al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de obtener el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o acuerdo colectivo de trabajo que firmaron producto de la negociación colectiva, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010.**

Para dicho cambio se tuvo en cuenta que los compromisos consagrados en los acuerdos colectivos de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o hacen parte de aquellas prerrogativas

concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe.

De acuerdo con lo dicho, las pautas que regulan actualmente el tema de las pensiones consagradas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, según la **sentencia SL3635-2020**, son:

"En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto, son las siguientes:

a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. (Destaca la Sala)

b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.

c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010."

Posición que ha sido reiterada hasta la actualidad, tal y como se puede apreciar entre otras, en providencias, **SL399-2022, SL516-2022, SL579-2022, SL626-2022, SL1226-2022, SL1240-2022, SL1311-2022, SL1482-2022, SL1603-2022, SL1656-2022, SL853-2023, SL905-2023 y SL1023-2023.**

Adicional a que se debe considerar que dicho órgano de cierre en asuntos donde se discutió la causación de beneficios convencionales en torno a la

edad y tiempos de servicios, ha definido que, si es posible su reconocimiento, en tanto, el primero de los supuestos es un requisito de exigibilidad y no de causación del derecho. Así, en SL889-2021, reiterada en la SL2832-2023, se indicó:

«la causación del derecho pensional es diferente a su disfrute, en tanto lo primero ocurre cuando aquel se consolida o se reúnen los requisitos para su nacimiento, mientras que lo segundo presupone que el derecho está causado y solo hace referencia a su exigibilidad»

Y en la CSJ SL517-2020, se expresó:

[...] Un derecho se causa cuando se consolida o, bien sea, en el momento en que su titular reúne los requisitos indispensables para que este nazca. El disfrute, en cambio, supone que el derecho ya fue causado y hace referencia a su exigibilidad, a cuándo se hace viable que este ingrese al patrimonio de su titular.

Así las cosas, al quedar zanjada la discusión frente a los trabajadores oficiales beneficiarios de la Convención Colectiva suscrita entre la Gobernación de Antioquia y la Organización Sindical Sintradespartamento, respecto a la procedencia del derecho después del límite temporal establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 y que el requisito de edad es necesario para la exigibilidad, mas no para la causación, se tiene, contrario a lo expuesto por el juez de instancia, que **al señor Francisco Agudelo, le asiste derecho al otorgamiento y pago de la pensión de jubilación al haberla causado cuando cumplió los 20 años de servicio, esto es, el 30 de enero de 2010, con exigibilidad en la fecha de arribo a los 50 años, el 04 de mayo de 2017,** motivo por el cual se revoca la sentencia en este apartado, quedando supeditado el disfrute a cuando ocurra el retiro como trabajador del Departamento de Antioquia, tal y como se dispuso en el art. 98 de la Recopilación de Normas Convencionales y laudos Arbitrales Vigentes entre 1945-2002 (pdf 2 pág. 137 y ss), en tanto, a la calenda de la emisión de la sentencia no se corrobora de los medios aportados este supuesto. **La prestación será**

compartible con la pensión de vejez que eventualmente le sea reconocida por parte del fondo al cual se encuentre afiliado, al tenor de lo dispuesto en el art. 5° del Acuerdo 029 de 1985, dado que en los textos convencionales no se dispuso lo contrario.

El valor de la mesada se deberá calcular con el *«equivalente al 80% del promedio mensual de los salarios devengados por el trabajador en el último año de labores»* según lo regulado en el art. 99 de la Recopilación de Normas Convencionales y laudos Arbitrales Vigentes entre 1945-2002, que agrupó lo indicado en el art. 7° de la CCT del 30 de noviembre de 1978, teniendo en cuenta las variables establecidas en el artículo 100 de dicha recopilación. Dado que la prestación se causó con el cumplimiento del tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2011, podrá otorgarse a razón de 14 mesadas anuales, de conformidad con lo establecido en el parágrafo transitorio 6° del Acto Legislativo 01 de 2005, **en caso de que no supere el monto los 3 SMLMV.**

Las mesadas causadas no se ven afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción, ya que no se advierte el retiro del demandante de la entidad, por esta misma razón no es procedente el pago de los intereses moratorios pretendidos, al no haber operado mora en el otorgamiento de la prestación. Respecto al valor del retroactivo, si lo hubiese, se autorizan los descuentos a salud y **se ordena su actualización** mediante el mecanismo de **la indexación** a la fecha de su pago, ello en aras del restablecimiento de su poder adquisitivo, disminuido por la inflación que permea la economía nacional, bajo principios de justicia y equidad, y el derecho del actor a percibir el valor real de lo debido, acatando además el precedente vertical.

Costas en ambas instancias a cargo de la demandada, art. 365-4 del C. G. del P., en esta, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca** la sentencia proferida por el Juzgado **Veintisiete** Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Francisco Javier Agudelo Hincapié**, en contra del **Departamento de Antioquia**, para en su lugar:

1.- Condenar al Departamento de Antioquia a reconocer y pagar al señor Francisco Javier Agudelo Hincapié, la pensión de jubilación consagrada en la cláusula 12 de la CCT del 9 de diciembre de 1970 y el art. 96 de la recopilación de normas convencionales y laudos arbitrales, a partir del retiro efectivo del servicio.

Para efectos de la liquidación de la mesada se tendrá en cuenta lo establecido en los arts. 99 y 100 de la Recopilación de Normas Convencionales y laudos Arbitrales Vigentes entre 1945-2002. Así como lo regulado en el Acto Legislativo 01 de 2005, frente a la mesada 14.

Del valor del retroactivo, si lo hubiese, se autorizan los descuentos a salud y se ordena su actualización mediante el mecanismo de la indexación a la fecha de su pago teniendo en cuenta la causación periódica.

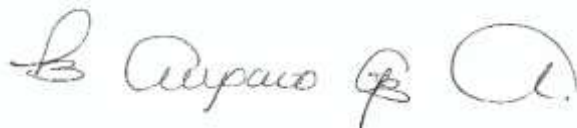
2.- La prestación será compartible con la pensión de vejez que eventualmente le sea reconocida al señor Francisco Agudelo por parte del sistema general de seguridad social, caso en el que la Gobernación de Antioquia continuará pagando el mayor valor existente entre una y otra.

3.- se declaran no probadas las excepciones propuestas.

4.- Costas en ambas instancias a cargo de la demandada y a favor de la parte actora. En esta, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE